

desInformémonos

Periodismo de abajo



Las nuevas rutas del despojo

En su tercer aniversario *Desinformémonos* presenta entrevistas a integrantes de diferentes pueblos indígenas de México, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Bolivia, Brasil, Honduras y Panamá, quienes explican los métodos de despojo que se viven en sus comunidades y contra los que, con valentía y arrojo, resisten.

520 años después

Las nuevas rutas del despojo

Durante más de medio milenio los pueblos originarios de América han sufrido la ambición de los conquistadores, que les han arrebatado sus recursos naturales para convertirlos en mercancía. Sin embargo, 520 años de embates no han conseguido rendirlos, al contrario, la defensa de su cultura y su cosmovisión está hoy, aseguran, más viva que nunca.

En su tercer aniversario *Desinformémonos* presenta entrevistas a integrantes de diferentes pueblos indígenas de México, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Bolivia, Brasil, Honduras y Panamá, quienes explican los métodos de despojo que se viven en sus comunidades y contra los que, con valentía y arrojo, resisten.

Entrevistas: Joana Moncau, Adrián Bibriesca, Adazahira Chávez, Jaime Quintana, Gloria Muñoz y Marcela Salas

México

Sonora

En el Valle del Yaqui, el agua no tiene precio

La tribu yaqui se asienta desde tiempos milenarios en un área rodeada por clima semidesértico, en el estado de Sonora, al norte de México. Por ello el agua es el recurso más valioso que posee y durante siglos lo ha defendido.

Actualmente, el gobierno estatal encabezado por el panista Guillermo Padrés, construye ilegalmente el acueducto Independencia, un megaproyecto con el que se desviará el agua de la cuenca del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo para darle uso industrial, privando del precioso recurso al pueblo yaqui y quitándole de este modo la posibilidad de sembrar y conservar su soberanía alimentaria.

Mario Luna, autoridad tradicional de la tribu yaqui.



Para el pueblo yaqui el agua es lo más precioso que se tiene. Nuestro territorio, que está bordeado por el río Yaqui, posee un microclima, es como un oasis en el desierto y por eso siempre ha sido tan codiciado. Desde tiempos milenarios, el agua ha unido a las tribus en torno al río, por lo que para nosotros tiene un simbolismo muy grande, no sólo económico y político, sino también cultural.

Poco a poco, los diferentes gobiernos nos han ido despojando del control de las presas del Yaqui, que han ido disminuyendo de tamaño hasta quedar prácticamente vacías. En el último tramo del río Yaqui, antes de llegar al mar, ya no hay ningún tipo de escurrimiento. El río está totalmente seco porque hay represas y desviaciones ilegales.

Esto es y ha sido parte de un ataque sistemático y programado por parte del gobierno. Primero con lo que era la Secretaria de Recursos Hidráulicos, después con la Secretaria Nacional del Agua, que luego se convirtió en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); todas las instancias gubernamentales tan sólo han ido perpetuando el despojo. Sabemos que una vez controladas las aguas, intentarán dar el paso final, que es privatizar del todo el control del agua, por medio de un acueducto que le será concesionado a empresas privadas, que ya tienen el aval de la clase política.

Mediante la construcción del acueducto Independencia, el gobierno quiere dar el golpe final a los pueblos yaqui. Ellos están demostrando que no van a reparar en nada para lograr su objetivo: están agrediendo a los pequeños propietarios y a los grandes latifundistas de los siete municipios que comprenden el sur de Sonora, y a los miembros de la tribu yaqui. La ambición ya es totalmente desmedida.

Guillermo Padrés tiene todo el aval y toda la fuerza del Estado, por eso sigue llevando adelante una construcción que es ilegal, porque nosotros, el pueblo yaqui, tenemos amparos ganados con sentencias a favor, contra la misma licitación de la obra, y sin embargo la obra sigue.

De acuerdo con la sentencia que dictó una jueza federal, el gobernador está en desacato. La justicia federal nos ampara para tumbar el manifiesto de amparo ambiental que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Ambientales (Semarnat), por lo que queda sin efecto el manifiesto de impacto ambiental y las obras tendrían que ser suspendidas inmediatamente, pero siguen y siguen, y el gobernador sigue diciendo que nada ni nadie lo van a detener.

Nosotros estamos enfrentándonos al despojo por la vía legal, pero también hemos hecho muchas manifestaciones y organizado marchas multitudinarias. Pero sobre todo estamos haciendo uso de los recursos jurídicos. La situación está muy difícil. La Semarnat solicitó la revisión del amparo, pero el caso todavía no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). También tenemos abierto un juicio de restitución de agua, tenemos una medida cautelar que prohíbe que se extraigan aguas y estamos ciertos que teniendo esto, ni aun terminando el acueducto podrían disponer de nuestras aguas, pero la prepotencia y la impunidad con que se maneja el Estado da cuenta de que no están dispuestos a someterse a las leyes.



A esto debemos sumar la depresión económica. Antes sembrábamos la tierra y había prosperidad, no dependíamos de otros para alimentarnos. Ahora, nos han quitado el derecho al crédito, hay carteras vencidas, y esto nos ha puesto en una situación más débil para resistir, pues están empezando a escasear los recursos. Aún así, no pensamos rendirnos ni bajar la guardia. Para defender el agua, llevaremos esta lucha hasta sus últimas consecuencias.

Nayarit

Un 12 de octubre no se celebra jamás

El centro sagrado wixárika Tatei Haramara, ubicado en la Isla del Rey, en Nayarit, es uno de los lugares amenazados por las empresas turísticas que pretenden construir aquí un parque hotelero.

La Isla del Rey está frente a la cabecera municipal de San Blas, es una zona virgen a la cual se llega en lancha. En las veredas se observan venados cola blanca y grandes iguanas. Todo esto, 520 años después,

continúa resguardado por el pueblo wixárika, también conocido como huichol.

Maximino Muñoz de la Cruz, wixárika de Nayarit



A pesar de los cambios dentro del marco legal, los pueblos indios nos seguimos encontrando desprotegidos en relación a nuestros territorios y recursos naturales.

Se han reformado leyes y nos han dejado sin ninguna protección. En el caso del pueblo wixárika, el gobierno federal concede un territorio sagrado, que para nosotros es parte de nuestras costumbres.

En Nayarit tenemos la Isla del Rey, que es un lugar sagrado, concesionado a empresas turísticas que están desarrollando una estructura hotelera. Al mismo tiempo, una

presa en Las Cruces, nos vienen a quitar los recursos naturales a los pueblos indígenas, a los coras y wixárika.

Son más de 500 años de padecer la imposición por el robo a la tierra. Estamos viviendo esa etapa, pero más disfrazada. Al final de cuentas es despojo de nuestros recursos naturales.

La resistencia está en las comunidades, en nuestras autoridades. Yo creo que la idea que tiene el gobierno es que nos vamos a ir. Pero lo que no saben es que tenemos un arraigo con la tierra, y tenemos una forma de ver la vida y de entender el mundo, y tenemos todo el sustento de nuestras autoridades y organización.

Es ahí donde esta nuestra fuerza, en la costumbre, y de ahí obtenemos la resistencia. Y es duro porque en cada embate, las autoridades causan división entre nosotros.

El gobierno coopta organizaciones indígenas que quiere tener como aliados, por medio de programas sociales y esto crea división. Son las estrategias del gobierno que tiene para esta lucha.

Nosotros cada año, el 12 de octubre hacemos una marcha por la dignidad de los pueblos. Hacemos un llamado y decimos que estamos peor que antes. Ellos esperan que se repita la historia. Estamos resistiendo, buscando aliados, a pesar de tantos años nuestro pueblo no quiere dejar de luchar.

Un 12 de octubre no se celebra jamás.

Durango

“Hay mucha injusticia, no podemos quedarnos callados”

Para el pueblo wixárika, en Wirikuta está el corazón del mundo. Por ello, año con peregrinan desde Jalisco, Nayarit y Durango para ofrendar a sus ancestros y pedirles que la vida continúe en este planeta.

El lugar sagrado de este pueblo está amenazado por las 22 concesiones mineras, un proyecto de trasnacionales canadienses que devastaría no sólo el medio ambiente de esta región, sino la cultural de un grupo originario ancestral.

Santos de la Cruz Carrillo, comisario de Bancos de San Hipólito, Durango.

Wirikuta es un lugar sagrado para el pueblo indígena wixárika. Está ubicado en los municipios de Villa de Ramos, Charcas, Santo Domingo, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Matehuala y Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí.

En este lugar, el gobierno mexicano ha otorgado 22 concesiones mineras a la compañía canadiense First Majestic Silver y sus contrapartes mexicanas, para la exploración y explotación de minerales, principalmente de plata.

Soy parte del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, que exige el respeto a su centro ceremonial y la cancelación inmediata de todas las concesiones mineras otorgadas.

En este momento hay una necesidad de organizarnos y despertar por la situación que atraviesa el país. Hay muchos embates de quienes están destrozando nuestro territorio.



Nosotros como pueblos indígenas estamos viviendo muchas amenazas. Hay mucha injusticia, y si nos quedamos callados y esperamos a ver quién nos despierta, pues nadie lo hará más que nosotros mismos.

El pueblo wixárika lleva su propio proceso. Nuestro movimiento básicamente es para resguardar nuestros territorios sagrados ante las permanentes amenazas de despojo por parte de las empresas mineras. En todo el país cada pueblo está luchando en sus trincheras.

Jalisco

En defensa de la tierra, la historia y la cultura

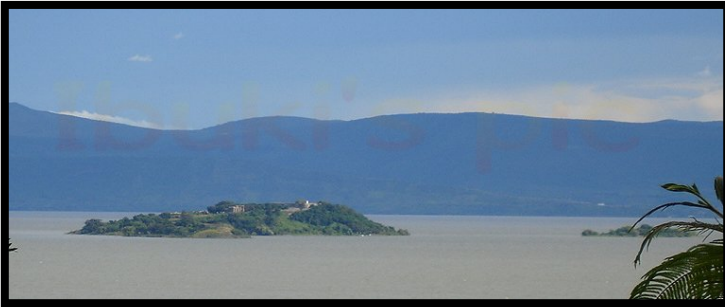
La estratégica ubicación del pueblo coca de Mezcala, a la orilla del lago más grande de México, ha hecho que los empresarios ambicionen la construcción de desarrollos turísticos. Pero en esta comunidad, la gente no conoce la propiedad privada, todos los terrenos son comunales y no están dispuestos a vender, ni a permitir la invasión.

Rocío Moreno, activista coca, historiadora y maestra de la comunidad.

Nuestro pueblo de Mezcla es una región donde hay mucho turismo, porque está a un lado del lago de Chapala, uno de los centros turísticos más importantes del estado de Jalisco. En los pueblos que están alrededor hay complejos habitacionales, donde viven muchos extranjeros y gente adinerada, pero este desarrollo turístico termina donde empieza el territorio de nuestra comunidad, porque aquí es todo comunal y no hay propiedad privada.

Lo que las empresas y el gobierno están tratando de hacer es construir fraccionamientos en la comunidad de Mezcala, que posee 3mil 600 hectáreas de tierra comunal. Actualmente hay dos hectáreas que están invadidas por un empresario de Guadalajara, Guillermo Moreno Ibarra. Pero ya interpusimos una demanda y hay un juicio. No permitiremos que se quede, lo vamos a sacar, porque aquí no existe la propiedad privada. Estamos luchando para que esta persona se vaya porque llegó

ilegalmente, no tiene ningún papel de la comunidad que le dé derecho a ocupar esas tierras.



El otro tipo de despojo que quieren hacer en nuestro pueblo es cultural e histórico. Hay una isla que pertenece a la comunidad; la utilizamos como área de cultivo, pero además es un espacio simbólico,

porque durante la guerra de Independencia, allí hubo una resistencia de cuatro años, la cual conmemoramos cada año. En fechas recientes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha intentado meterse y modificar la lectura que se tiene de los vestigios históricos que hay allí. En el 2010, en el marco de los festejos del Centenario de la Independencia, intentaron privatizar el área, pero no lo lograron por la movilización de la población.

Nuestra defensa es jurídica. Hemos interpuesto juicios de restitución de tierras comunales, pero en el fondo sabemos que eso sólo es un trámite. Lo que más ha ayudado es el fortalecer las asambleas comunitarias, informar a la comunidad sobre lo que ocurre, discutir entre nosotros cómo cuidar y mantener nuestra organización. Hemos entendido que también debemos informar a otros pueblos y a la sociedad en general. Eso nos ha dado fortaleza para seguir resistiendo.

Michoacán

“En Cherán perdimos el miedo para recuperar la paz”

En abril de abril de 2011, hartos de los talamontes que para entonces, coludidos con el crimen organizado y con el gobierno, habían saqueado más del 80 por ciento de sus bosques, la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, decidió retomar su organización tradicional para hacer frente a quienes robaban la madera de su territorio.

Salvador Campanur, comunero de Cherán

Los 20 mil habitantes purhépechas de la comunidad de Cherán estábamos cansados de agachar la cabeza, por eso, el 15 de abril del 2011 nos organizamos para enfrentar a los talamontes vinculados a las mafias que operan en la región.

Desde el 2008, grupos de delincuentes –solapados por el gobierno– comenzaron a saquear madera de los bosques de nuestra comunidad. Durante años destruyeron más de 15 mil de las 20 mil hectáreas del territorio.

Hartos de esta situación, los pobladores de esta comunidad, encabezados por las mujeres, vencimos el miedo y retomamos el control de la defensa. Se instalaron barricadas en las entradas del pueblo y fogatas en cada calle de Cherán. Esto ha costado el asesinato de 13 de nuestros compañeros.

En el gobierno siempre quieren resolver los problemas con programas gubernamentales que sólo sirven para dominar a la población, pero el levantamiento de Cherán fue para que haya paz y democracia en nuestra comunidad, y eso todavía no llega.

En Cherán entendemos muy bien que para que haya democracia debe de haber libertad y justicia, y esto no existe en nuestro país. Esto es precisamente lo que nos llevó a caminar por el camino por que el andamos ahorita, que es el de la libre determinación y de la autonomía.

El gobierno nos quiere imponer la idea de que puede haber democracia a través de los partidos políticos, pero esos partidos representan la mentira, la traición, la amenaza y el sometimiento. Y eso nosotros lo hemos comprobado en nuestra comunidad, porque desde Cherán miramos como el gobierno municipal priista, el gobierno estatal perredista y el gobierno federal panista, son exactamente lo mismo. No hay diferencia.



Guerrero

Se está preparando una guerra total contra nuestros pueblos

Las regiones Montaña y Costa Chica de Guerrero se encuentran entre las 36 "zonas prioritarias" del país, que tienen como común denominador la pobreza, el narcotráfico, la migración, la violencia y la militarización. La Montaña, cuenta con el 85 por ciento de población indígena que sobrevive en grave situación de rezago y marginalidad. Aquí habitan na savi (mixtecos), me'phaa (tlapanecos), nahuas y mestizos.

David Valtierra, nanncue ñomndaa, de Suljaa' (Xochistlahuaca)

Vivimos una guerra de despojo desde hace 520 años. Los pueblos deben de hacer sus propias maneras de organizarse, ellos tiene sus propias estrategias. Los territorios indígenas están siendo disputados por los intereses capitalistas.

La idea del despojó no pasa solamente por los españoles, son los capitalistas, los empresarios. En la Costa Chica, en el estado de Guerrero, están los caciques del Partido Revolucionario Institucional, que por 12 años se han mantenido.

Se roban por generaciones la arena, la graba, ese un saqueo. Pero también es una penetración de productos que son de fuera de la región, y para esto construyen sus carreteras, que le permiten la doble entrada al capitalismo.



Después de 520 años, el pueblo ha resistido de diferentes formas y nosotros estamos en la resistencia. Nos informamos la radio Ñomndaa , *la Palabra del Agua*.

Cirino Placido, na savi, de la Montaña y Costa Chica

La asamblea es la forma que tienen los pueblos para resistir. Representa sus usos y costumbres, ahora que nos están invadiendo en lo cultural y en lo ideológico. Son invasiones de despojo lo que está haciendo el Estado y por eso los pueblos estamos ejerciendo nuestros derechos colectivos.

En la Montaña y Costa Chica de Guerrero, nos comenzaron a invadir modificando el artículo 27 Constitucional, luego con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (*Procede*) y ahora con la minería que se nos impone, no se nos consulta a los pueblos.

Son los pueblos en sus asambleas comunitarias los que están rechazando estos proyectos, aun cuando haya un decreto presidencial.

Aquí se organizan con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria y organizaciones de producción y también con la iglesia.

Ahora no tenemos nada que celebrar. A 520 años lo que tenemos es miedo de ser exterminados como pueblos, aunque hemos logrado resistir muchos siglos.

En la actualidad las políticas de despojo son muy agresivas, se está preparando una guerra total. Están dividiendo por medio de los partidos políticos, organizando paramilitares y narcotráfico, provocando metiendo. Esto nos preocupa. A 520 años, cómo vamos a seguir sobreviviendo en esta resistencia. Al ejército y a los paramilitares los



equipan, a nosotros nos asustan y el despojo se gesta. Son mafias que quieren desarticular a los pueblos. Vienes a destruir el tejido social, la asamblea. No merecemos ser exterminados. Tenemos derecho a vivir.

Estado de México

“Nuestra organización comunal sigue viva”

Entre la ciudad de Toluca, Estado de México, la Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos hay pueblos ancestrales que aún practican una forma de tenencia de la tierra de manera ejidal y comunal. Estos pueblos tienen también un gobierno y una forma de organización comunal que están muy presentes y muy consolidadas. Muchos llevan a la práctica la autonomía, pero en algunas comunidades la forma ancestral de autogobierno está debilitada e incluso se está perdiendo por muchos factores, como intereses de empresas, de presidentes municipales y de los gobiernos de los estados.

Juan Dionisio, comunero ñañhú de San Pedro Atlapulco, Estado de México.

Los pueblo que habitamos entre Toluca, la Ciudad de México y Cuernavaca, anteriormente teníamos muchos recursos: territorio, tierra para sembrar, agua y bosques, pero poco a poco hemos ido perdiendo el control sobre éstos.

Algunos de los casos más graves de despojo son los pueblos de Ocoyoacac, Lerma y San Mateo Atenco. Allí, las industrias han proliferado y se han instalado diversos centros comerciales. Con estos cambios llegaron también las inmobiliarias, a construir unidades habitacionales y así empezó a especularse con la tierra, que antes era de propiedad comunal.

Con las modificaciones que se le hicieron al artículo 27, a los pueblos indios les fue arrebatado su territorio de forma “legal”. Bajo el amparo de esa ley, se vendieron de manera “legal” las tierras y comenzó la construcción de casas, con la consecuente escasez de agua para los pueblos que viven alrededor de esta área. Allí se padece mucho la falta de este valioso recurso, que hasta antes de la invasión de las industrias, abundaba.

Otro de los proyectos que se realizan en la zona, es la construcción de la carretera que va de Lerma a Tres Marías. Una carretera que, además, será de cuota. Para construir este camino están talando muchos árboles que están en territorio de pueblos nahuas, como San Mateo Texcalyacac.



Se han interpuesto amparos contra esta obra, y algunos se han ganado, pero no son respetados y las obras siguen.

Mi pueblo, Atlapulco, fue afectado de manera con un decreto que permitió que se exploten los manantiales que están en nuestro territorio para surtir a la Ciudad de México. Nunca nos consultaron sobre esta medida, y aunque interpusimos amparos, se siguen llevando el agua. Pero aquí no conocimos el robo de tierras. En los años setenta se intentó. Fuimos despojados de parcelas, pero nos amparan los títulos primordiales, y gracias a eso pudimos emprender la defensa legal de nuestro territorio y de nuestra vida comunal, que sigue viva hasta hoy.

Está muy claro que nuestra forma de vida comunal se opone a los grandes intereses económicos, les estorbamos. Por eso de diversas formas buscan que se olvide nuestro origen como pueblos, pero nosotros continuaremos con nuestra defensa legal y fortaleciendo desde cada comunidad lo que nos une y da identidad: la tierra, la faena, la fiesta, la danza, la milpa, el maíz.

América

Chile

En territorio mapuche, despojo a sangre y fuego

Nueve jóvenes mapuches se encuentran en huelga de hambre en cárceles chilenas. Son presos políticos que resisten al despojo que las empresas forestales, mineras y pesqueras realizan contra su pueblo.

Sergio Millamán, abogado y comunicador mapuche del diario Mapuexpress

Las industrias enemigas

Hoy día, el pueblo mapuche, tanto en el lado chileno como en el lado argentino de la Cordillera de los Andes, está constantemente amenazado por distintos proyectos de inversión y de explotación de recursos naturales que se quieren asentar en nuestros territorios. Específicamente en el lado de Gulu Mapu –que es como llamamos al

territorio que está en el lado chileno-, el principal enemigo hoy y desde hace más de 20 años es la industria forestal.

El monocultivo de pino y eucalipto es una industria que concentra una gran cantidad de tierras ancestrales mapuches, de las cuales se fue apropiando a lo largo del siglo XX a través de distintas formas de despojo territorial, que hoy son la base fundamental de esta forma de monocultivo.



Hay una serie de afectaciones a los recursos naturales y a los recursos hídricos. La industria forestal, por un lado, ha hecho desaparecer a los bosques nativos y a su biodiversidad; y por el otro lado, las especies exóticas ajenas al territorio mapuche son grandes consumidoras

de recursos hídricos. Los monocultivos de pino y eucalipto han secado las fuentes de agua que abastecían a las comunidades mapuches para sus distintos usos, específicamente para la agricultura y el cuidado de animales. Hay que agregar que esta industria usa en forma indiscriminada una serie de productos químicos –como fertilizantes y pesticidas- que afectan a las comunidades mapuches que viven en forma colindante a las plantaciones.

Actualmente hay una gran presión sobre los territorios y recursos naturales que existen en el territorio mapuche, y para consolidar esos procesos de instalación de los proyectos de inversión, el Estado desarrolla una serie de políticas públicas que fomentan las inversiones en desmedro de los derechos de las comunidades mapuches.

Uno de los grupos económicos más grandes de Chile y el mundo es el grupo Angelini, dueños de las principales forestales de Chile y de otras industrias, como la pesquera. Está también en el territorio el grupo Matte y las forestales Mininco, Arauco y Masisa. Son grupos económicos

chilenos que, gracias al enriquecimiento que han logrado a costa de los territorios y los recursos mapuches, se han extendido a toda Latinoamérica. Grupo Angelini está invirtiendo en plantaciones forestales en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Son transnacionales que se han construido en base a los recursos que han usurpado al pueblo mapuche.

Un caso que estamos tratando de detener en Chile es una reforma a la legislación pesquera que se está discutiendo en el parlamento chileno. Ésta tiene como objetivo garantizar el acceso a los recursos pesqueros sólo a los pescadores industriales -que en Chile están concentrados en un grupo de cuatro consorcios económicos-, mermando el acceso de los pescadores indígenas a los recursos pesqueros.

Anteriormente, otras legislaciones han favorecido a la industria salmonera y a la industria acuícola para que, con recursos estatales, se puedan instalar en los bordes costeros de los pueblos indígenas. También se han promovido, por medio de políticas públicas, la instalación de proyectos hidroeléctricos a lo largo del territorio mapuche con el objetivo de producir energía para las industrias. Específicamente, el Estado promueve las inversiones mineras y para eso busca abaratar la producción de energía que esta industria necesita. Por eso promueve una serie de proyectos de inversión energéticos, entre estos los hidroeléctricos, que invaden territorios mapuches.

Un caso que hemos denunciado últimamente es el de una central hidroeléctrica que quiere construir la empresa Endesa, una transnacional española cuyo principal accionista es la italiana ENEL, y que pretende inundar territorio mapuche en la zona de Neltume, en la cordillera Panguipulli, inundando centros ceremoniales que las comunidades del sector han utilizado en forma ancestral para sus prácticas religiosas. Esta empresa presiona y el Estado está accediendo a otorgarle todas las autorizaciones necesarias para que puedan construir esta represa.

Despojo a sangre y fuego

Las formas de despojo tienen que ver con la extorsión del sistema capitalista que el Estado chileno ha promovido durante los últimos 30 años, desde la dictadura militar hasta la fecha. Es un modelo que fue instaurado a sangre y fuego por la dictadura y después implementado, los últimos 20 años, por los gobiernos democráticos "socialistas". Para

favorecer la inversión extranjera han otorgado subsidios y han hecho legislaciones favorables, y han amparado prácticas como la cooptación de las organizaciones sociales e indígenas, generando prácticas de clientelismo y asistencialismo.

A los sectores de los pueblos indígenas que no aceptan ni la cooptación ni el clientelismo, y que se siguen oponiendo a estos proyectos de inversión, los criminaliza persiguiéndolos, aplicándoles legislaciones especiales –como la Ley Antiterrorista-, enjuiciándolos y condenándolos a altísimas penas de cárcel; y lo que es peor todavía, manteniendo en la absoluta impunidad a los agentes del Estado que han atentado contra la vida de algunos jóvenes mapuches que se resisten a la industria forestal o a otros proyectos de inversión.

Hay por lo menos tres jóvenes mapuches – 23 o 24 años, incluso un menor de edad, Ángel Lemún-



asesinados por carabineros de Chile mientras participaban en acciones de protesta social. Los responsables de esos crímenes se encuentran en la más absoluta impunidad, y los que han sido a condenados lo han sido a penas bajísimas que los tienen en su casa e inclusive en servicio activo en la fuerza policial.

Las distintas formas de despojo quizá son similares a las que ocurren en otros territorios indígenas a lo largo del continente, y tienen que ver con la misma lógica que se impuso hace más de 520 años en América Latina, que es imponer por la fuerza y sin considerar los derechos, la voz ni los intereses de los pueblos indígenas; imponer de cualquier forma este tipo de inversiones que favorecen a un grupo minúsculo de personas –que son los que controlan las transnacionales- dejando no sólo muerte y pobreza, sino también destrucción de los territorios ancestrales para los pueblos indígenas.

La resistencia y los presos políticos

Son variadas las formas de resistencia del pueblo mapuche hoy. Se busca denunciar a nivel internacional los atropellos que el Estado y los gobiernos han amparado y promovido los últimos años. Hay comunidades que están en procesos de recuperación territorial, tomando en forma pacífica, sin armas de fuego, predios forestales, expulsando a los "dueños". También se exige al Estado que implemente el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que su ejecución ha sido bastante lenta y deficiente por parte del Estado.

En este momento, parte de los luchadores mapuches que han resistido a estas formas de despojo y que han sido criminalizados se encuentran en las cárceles de Angol y Temuco, en Chile, y ante las condenas y los juicios en los que están involucrados, han decidido organizar una huelga de hambre. Hay un grupo de cuatro jóvenes que ya lleva más de 40 días en la huelga exigiendo un proceso justo, porque los procesos en los que han sido enjuiciados abundan una serie de vicios procesales. Los jueces, fiscales y el ministerio público tienen actitudes racistas y poco objetivas.

Por tanto, ellos exigen que se termine la aplicación de la Ley Antiterrorista y la persecución de los fiscales y ministerios públicos hacia el territorio mapuche, y que se termine -por sobre todas las cosas- con la violencia habitual con que la policía chilena interviene en las comunidades mapuches, violentando a mujeres, niños y ancianos, sin ningún castigo y en la más absoluta impunidad.

Hay una gran cantidad de hermanos mapuches que ya han cumplido condena o que han estado en prisión preventiva más de dos años, a la espera de que se realicen los juicios en los que han sido involucrados. Después de haber estado en prisión y haber sufrido una pena adelantada, han sido absueltos. Hay un gran número de hermanos que han vivido la prisión política sin fundamento. En este momento, hay nueve hermanos presos políticos mapuches que se encuentran en huelga de hambre.

Pedimos que en la mayor cantidad de partes del mundo se haga eco de su llamado, que se generen acciones para presionar al Estado chileno y que se vea obligado a respetar los estándares mínimos en materia de

derechos humanos hacia los pueblos indígenas, y especialmente hacia el pueblo mapuche.

Guatemala

“Su poder de destrucción es mayor al que ocurrió hace 502 años”

Guatemala es un país chiquito, un poco más grande que Chiapas. Tiene 180 kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes y en el territorio existen más de 370 exploraciones de minería y demás megaproyectos que implican el despojo de sus recursos.

Domingo Hernández Ixcoy, Comité Unidad Campesina

En Guatemala estamos en la fase de mayor destrucción del capitalismo a nivel Internacional, en el que la humanidad ha experimentado destrucción en poco tiempo.

Los países colonizadores nunca habían llegado a un nivel como el de ahora. Ellos se han enriquecido gracias a su historial de despojo y saqueo de los pueblos. Pero nunca a este nivel, en Guatemala y en Centroamérica vemos que debemos oponernos fuertemente, hasta hacer retroceder los intereses de la oligarquía nacional de las trasnacionales.

Nuestros pueblos corren el riesgo de desaparecer en gran parte, nosotros hemos llamado a esto neocolonialismo.

La enorme cantidad de megaproyectos que se quieren imponer en territorios de los pueblos indígenas, están pensando en la reubicación de los pueblos y comunidades completas. Esto implica un atentado contra la estructura comunitaria y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Su poder de destrucción es mayor al que ocurrió hace 502 años.

Guatemala es un país chiquito, un poco más grande que Chiapas, tiene 180 kilómetros cuadrados, tenemos 15 millones de habitantes y en el territorio existen más de 370 exploraciones de minería y demás megaproyectos.



Las exploraciones abarcan muchos kilómetros. Lo que ya se encontraron es oro, plata, zinc, petróleo. También los agrocombustibles, como la palma africana; y las hidroeléctricas que se quieren imponer en el norte de Chiche, en El Petén. Estos planes de generación de luz pretenden abaratar el

gasto de las grandes empresas que vender la electricidad a los países que hacemos frontera.

Nosotros vemos que existe un acelerado crecimiento de la riqueza y de la tierra en pocas manos, así como la disminución de tierra para sembrar maíz y frijol. Ellos, los empresarios, tienen claro que existirá escases de maíz y de frijol, y por esos están con los transgénicos.

Nosotros hablamos con uno de nuestros dirigentes mayores y le preguntamos que implicaba para nuestra salud. Y nos dijeron que van a romper con nuestra tradición milenaria de los pueblos indígenas, que con su maíz lo platican y lo cuidan. La mujer, cuando deposita el maíz, lo siembra, va por la milpa, cuando recoge la mazorca, platica con él.

Si nos van a mandar el transgénico seguramente nosotros vamos a seguir hablando con ese maíz. Pero ese maíz ya no hablara, la empresa le quitará el corazón.

Va a ser un cambio a la cultura. Para la resistencia juega un papel primordial, pues somos hijos de la tierra y tenemos que cuidarla. Ya empezamos a decir que los pueblos indígenas no somos ignorantes. Nosotros no somos pobres, nos han empobrecido y nuestras tierras nos fueron arrebatadas.

Los pueblos indígenas comenzamos a ver nuevos paradigmas con postura anticapitalista y antisistema. Este es un aporte de los indígenas

en este momento. Los indígenas no estamos solos, los indígenas, los mestizos, son varias identidades víctimas del sistema capitalista.

A los pueblos indígenas nos llama la atención el tema de la formación política y el concepto de la liberación de buscar alternativas. Un pueblo liberado es un pueblo con conocimiento, y cuando tiene conciencia del papel histórico que le corresponde, es la garantía de la lucha.

Este 12 de octubre movilizamos a 12 mil personas en la capital, con una proclama de condena a la masacre de Totoncapán, por los muertos y heridos.

Gilberto, Q'eqchi', Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)

La nueva invasión que vivimos los pueblos indígenas en Guatemala es por interés económico de los extranjeros. En Alta Verapaz, la región se ha caracterizado por un aumento del establecimiento de hidroeléctricas, mineras, petroleras, y plantaciones de monocultivos. Todos estos megaproyectos tienen el



propósito de sacar recursos naturales fuera del país, y dejan muy poco beneficio para la población guatemalteca, lo que plantea una amenaza directa a los territorios de los pueblos indígenas de las etnias Q'eqchi', Poqomchi, Achi, en la región de las Verapaces

En el área de la Franja Transversal del Norte nos están invadiendo varias empresas que se dedican a las plantaciones enormes de la palma africana y caña de azúcar. Los dos casos más notables son las empresas CHABIL utzajL e INDESA, que exigieron de 800 familias en marzo de 2012.

La misma región también ha sido explotada por la empresa petrolera Francesa Perenco, en el sur de Alta Verapaz, municipio de San Cristóbal;

también la empresa italiana Enel ha construido varias hidroeléctricas y tienen licencias aprobadas.

En el caso de las plantaciones de monocultivos no pagan ningún impuesto al Estado, tampoco los petroleros y mineros, que sólo pagan una regalía de 2 por ciento.

En Santa María Cahabón, por ejemplo, hay licencias mineras que cubren el municipio entero.

Otra empresa establecida es la canadiense CGN, que desalojó a 500 familias en 007, en el Departamento vecino de Izabal.

Las empresas multinacionales aprovechan la falta de certeza jurídica de las tierras de las comunidades para comprar grandes extensiones, sin tomar en cuenta los derechos legítimos de los pueblos indígenas que han vivido ahí por cientos de años. El Estado apoya las políticas neoliberales con la militarización de las comunidades que rechazan la entrada de empresas extranjeras.

Hay también cooptación de líderes campesinos por las empresas. En cambio, los líderes que no se venden sufren amenazas y persecución por la seguridad privada de las empresas y las mismas autoridades guatemaltecas. Es la criminalización de lucha social.

También hay ofrecimientos de proyectos paliativos, que nunca se realizan o realmente no recompensan el daño generado a las tierras.

En relación a la compra de tierra, muchas veces las empresas compran la comunidad parcela por parcela, dejando a los que resisten sin manera de sacar su producto de la comunidad. Igual la compra de tierra es apoyada en algunos casos por varios medios de comunicación, instituciones y ONG como Mercy Corps.

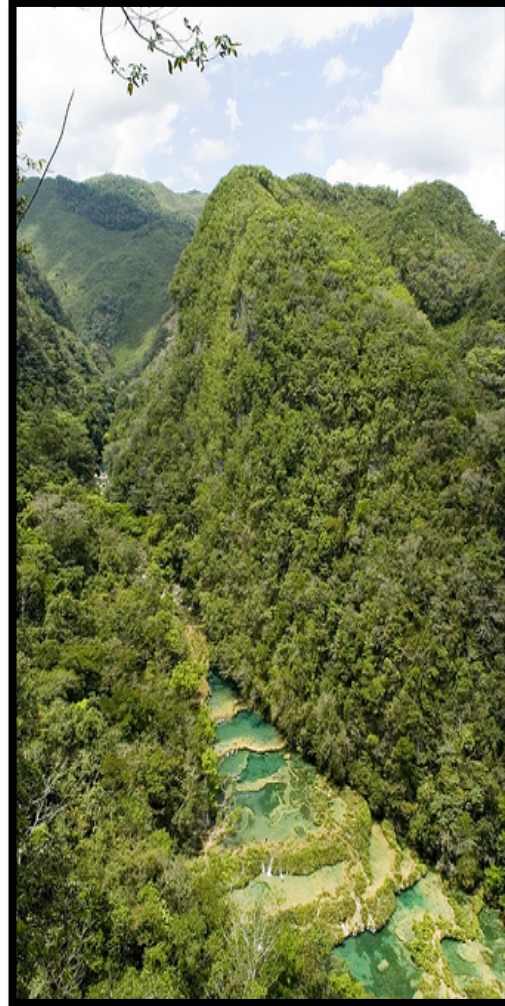
Como parte de la resistencia y la defensa del territorio, la UVOC también se dedica a la recuperación de la cosmovisión maya y de autoridades indígenas en las comunidades. Para que la gente pueda obtener el equilibrio comunitario que le enseñaron sus ancestros.

En varios municipios del país se han realizado consultas populares, sin embargo, el Estado se resiste a tomarnos en cuenta, porque legalmente no están constitucionalmente vinculados.

El único municipio de Alta Verapaz que ha realizado consulta es el municipio de Lanquín, donde aunque el alcalde aprobó la consulta, el gobierno no la toma en cuenta y sigue construyendo una hidroeléctrica en la región.

La UVOC fomenta también el establecimiento de Radios Comunitarias, espacios alternativos que permiten informar la gente sobre la coyuntura en sus comunidades y en su propio idioma.

La UVOC se sigue manifestando públicamente con caminatas y bloqueos de carretera, aunque estos espacios de protesta siempre están en peligro de ser reprimidos, como el caso de Totonicapán, donde se dio la masacre de los seis líderes comunitarios por parte de los ejércitos, durante un bloqueo de carreteras, apenas en este mes de octubre.



Ecuador

Megaproyectos en la mitad del mundo, una amenaza para la vida de la Amazonía

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, decretó en 2011 que el 12 de octubre sería el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad para "reconocer y rectificar el verdadero significado" de la fecha y "promover el diálogo entre las culturas y fortalecer la unidad nacional".

La realidad es que actualmente hay en Ecuador tres grandes megaproyectos que podrían afectar la biodiversidad, dos de ellos se encuentran en la zona de la Amazonía: la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ya está en marcha; y el proyecto minero Mirador, que está en obras e iniciaría en 2015. Además de la Refinería del Pacífico, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.

Luis Andrango, kichwa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador (FENOCIN)



La hidroeléctrica “Coca Codo Sinclair”, que se planificó desde los años setenta, se ubica en la zona de la Amazonía ecuatoriana. La Amazonía cuenta con el 60 por ciento de las selvas que quedan en el mundo, es un área de extraordinaria biodiversidad que juega un papel clave en la regulación del clima, no

sólo en América del Sur, sino en todo el planeta. En la cuenca de los Ríos Quijos y Coca se encuentra la fuerza necesaria para la producción de energía, y de ahí llega hasta el proyecto denominado Codo Sinclair (porque se une en forma de codo el río Santiago y el río Napo). Este proyecto hidroeléctrico se define como el más atractivo de esta cuenca y uno de los mayores de generación eléctrica con los que contaría el Ecuador.

La adjudicación de la obra se la dieron a la empresa Sinohydro, (estatal china de ingeniería hidráulica y construcción. Es la mayor compañía de hidroeléctricas en el mundo), y automáticamente se le dotó al proyecto de concesiones y licencias por parte de los órganos gubernamentales responsables, así como licencia ambiental, licencia de aprovechamiento forestal espacial, concesiones mineras de libre aprovechamiento de material de construcción y autorización para investigaciones arqueológicas de las vías y del proyecto en general.

Con la hidroeléctrica se pretende eliminar la importación de energía de Perú y Colombia, y durante su construcción, según datos de la compañía, se ofrecerán 3 mil puestos de empleo directos y 15 mil indirectos.

Sin embargo, la planta hidroeléctrica generará fuertes impactos en la reserva de la biosfera de Sumaco, una zona protegida por su fauna y flora únicas.

Una de las formas de despojo más recurrente, es crear un sistema agrario dependiente de agroquímicos y de semillas certificadas. Al principio, las empresas productoras ofrecen mayores niveles de producción a los agraristas, pero a la vuelta de la esquina quieren apropiarse de esas tierras. Además de que esos productos contaminan el medio ambiente, las comunidades terminan no teniendo otra opción que ceder o vender sus tierras, pues no logran pagar esos productos que les vendieron.

Ecuador y su Amazonía (que abarca 47 por ciento de su territorio) es de las cuatro zonas con mayor biodiversidad en el planeta, y el impacto de los megaproyectos no sólo es en la flora y fauna, sino que afecta las formas y costumbres de los pueblos.

En la Amazonía viven nueve nacionalidades, de las 14 que hay en el país. Los primeros efectos visibles de los megaproyectos son la contaminación del agua, pues desencadena su acaparamiento en pocas manos, lo cual afecta la lógica de sobrevivencia, no sólo de los indígenas, sino en general, además de que hay una afectación en la lógica de las formas de organización comunitaria, porque empiezan a pesar más las formas de explotación irracional de los recursos y a romper esa relación armónica-histórica con la Madre Tierra.

El Mirador

El proyecto de minería a cielo abierto conocido como Mirador, tendrá un aproximado de 27 mil toneladas diarias de roca mineralizada procesada, es decir, cerca de 600 toneladas de cobre concentrado por día y se producirán 26 mil toneladas de escombros que podrían convertirse en montañas tóxicas. La mina utilizará un máximo de 120 litros por segundo del río Wawayme y 700 litros por segundo de agua reciclada, pasando por la relavadera situada cerca del río Quimi. Durante la

marcha por la vida que se efectuó en marzo en Ecuador, se dijo que 681 mil millones de litros de agua contaminada quedarían como consecuencia a los habitantes de las zonas más cercanas.



La Cordillera del Cóndor forma frontera entre Ecuador y Perú. El yacimiento Mirador está localizado en la parroquia Tundayme, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, al sureste del Ecuador, y es el principal territorio de la nacionalidad indígena shuar, la cual se vería afectada ante la operación de la mina.

Casi el 54 por ciento de la superficie de Zamora ha sido concesionada, la mayor parte a empresas privadas. Las concesiones ya han ocasionado conflictos dentro de los propios shuar. Mientras otros miembros del pueblo Shuar ocuparon campamentos mineros para expulsar a las empresas transnacionales, un grupo de la misma nacionalidad inició el apoyo a la minería con soporte financiero pero con pocas comunidades reales bajo su liderazgo.

El proyecto lo lleva a cabo la empresa Corriente Resources, la cual es una corporación multinacional con sede en Canadá. En el año 2010, Corriente Resources fue adquirida por el consorcio chino CRCC-Tongguan Investment, para llevar a cabo el Proyecto Mirador en Ecuador.

Hay una fusión de capital privado y público para realizar los proyectos, pero no sólo es con Ecuador, es una cuestión de América Latina. Hay una apuesta de crear una línea para unir la estructura de explotación. Es una ofensiva muy fuerte del capital hacia los bienes naturales de nuestros países.

Refinería del Pacífico

La reserva natural de Yasuní, que guarda una de las biodiversidades más importantes del planeta, se vería afectada ante el desarrollo del proyecto. En 1989, el Parque Nacional Yasuní entró a formar parte de la

Reserva Mundial de Biosfera, dentro del programa del Hombre y de la Biosfera de la UNESCO, además, la región contiene dos poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. Sin embargo, existen reservas probadas de petróleo pesado por 940 millones de barriles.

El Banco Industrial y Comercial de China financiará el proyecto. Se instalará en Manta, el puerto ecuatoriano que representa la menor distancia entre América del Sur y China. Es un proyecto conjunto de los gobiernos de Ecuador y Venezuela -los dos principales exportadores de petróleo de Sudamérica- con los que se busca refinar 300 mil barriles diarios.

El derecho de la Pacha Mama

La Constitución de Ecuador de 2008 logró elevar a rango constitucional los derechos de la Pacha Mama. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no está haciendo uso de las fuentes de energía que se consideran económicamente más viables y de menos impacto para el entorno natural. La conquista de aprobar en la Constitución que la naturaleza pasaba a ser sujeta de derecho, ha sido muy difícil de implementar en la práctica.

Para pelear por el derecho de la Pacha Mama, hay una necesidad fuerte de que las organizaciones se unan y se movilicen, pues ahora, con el contexto electoral de constante fricción y división, pierde ímpetu el movimiento social y eso da fuerza a las empresas trasnacionales. Además, otro elemento para la lucha, es que debemos avanzar hacia un proceso de incidencia en los nuevos espacios que se abren, aquellos en donde los megaproyectos no se fijan en los efectos nocivos que tiene en la sociedad su creación, por ejemplo, en la misma Amazonía, en la que puede haber repercusiones en la humanidad.

Brasil

“Nos quieren robar el derecho a defendernos”

Roraima, Brasil. *El acecho a los recursos naturales de las tierras indígenas de Brasil, así como el atraso en la demarcación del territorio y la posible aprobación de una ley que niega el derecho a la consulta son*

las principales amenazas de los pueblos originarios, explica Joênia Wapichana, abogada indígena.

Nacida en una aldea Wapichana, en el estado de Roraima, Joênia Wapichana, del Consejo Indígena de Roraima (CIR), es la primera abogada indígena del país. Jugó un importante papel en la lucha por la demarcación del área de la tierra indígena Raposa Serra do Sol. En el 2009, ella y su pueblo lograron vencer ese embate. Sin embargo, apunta, una maniobra jurídica de ese entonces continúa sin resolverse del todo.

Joênia presenta una lectura sucinta y precisa sobre la actual situación de los pueblos indígenas de Brasil; señala que los principales desafíos son el acceso a la tierra para los indígenas no amazónicos. De hecho, detalla que de acuerdo con los censos más recientes, los indígenas no amazónicos representan más del 50 por ciento de los indígenas del país y ocupan menos del 2 por ciento de las tierras indígenas. Por su parte, los indígenas amazónicos enfrentan la presión por la explotación de recursos naturales dentro de sus tierras y la necesidad de pensar en formas de desarrollo que puedan conciliar la visión occidental con el modo indígena de ser.

Joênia Wapichana, del Consejo Indígena de Roraima (CIR)

La tierra

En Brasil todavía hay mucho que corregir en relación con los pueblos indígenas. Reconocer las tierras indígenas es uno de los principales retos. Aunque en la Amazonia la mayor parte de los trámites de demarcación de tierras ya han concluido, en el resto del país hace falta mucho qué hacer para garantizar a los pueblos originarios eso que es el punto central: la tierra. Son muchos los conflictos en ese sentido, principalmente en el ámbito jurídico.

Uno de los asuntos más urgentes por resolver, es el caso del pueblo guaraní kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul, donde varias empresas, en especial haciendas de plantaciones de soya y caña, intentan expandir el mercado fuera del país, a costa de la vida y del territorio de los indígenas. En el sur del país y en la región noreste también sigue pendiente la regularización de la tierra.

Presión por recursos naturales

En el caso de la Amazonía, el gran reto está relacionado a la cuestión de la explotación de los recursos naturales, sobre todo de los minerales que están dentro de las tierras indígenas. Actualmente no existe reglamentación alguna para los procedimientos de derecho de consulta a los pueblos indígenas, y ése es el gran debate en la actualidad.



Hay una propuesta de ley en el Congreso Nacional para reglamentar la explotación de los recursos naturales dentro de las tierras indígenas sin que tenga que ser ejercida la base legal de los procedimientos, es decir, sin que se tenga que hacer la consulta previa a los pueblos para que haya consentimiento libre, previo e informado. Además, en relación con los recursos hídricos, esa legislación provocaría una serie de "lagunas jurídicas" que permitirán crear cada vez más plantas hidroeléctricas. Por ello, los pueblos mantienen una batalla para lograr que los miembros del parlamento abran los ojos y se den cuenta de que esa ley es extremadamente desfavorable para los pueblos indígenas.

En términos de despojo, el caso más emblemático es el de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado de Pará. Tanto en lo que se refiere a las violaciones de derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho de consulta, como en términos de impacto directo a los pueblos indígenas por medio del despojo. Ésa es la prioridad y la política de Brasil: no se busca una alternativa energética invirtiendo en proyectos que tomen en cuenta la sustentabilidad. Aquí, en el estado de Roraima, está el caso de los yanomami, cuyas tierras están invadidas por buscadores de tesoros. En octubre se conmemoran los 20 años de la demarcación de las tierras indígenas yanomami, pero la amenaza de madereros y de buscadores de tesoros sigue aún muy vigente.

Presión que nace en el gobierno

Los pueblos indígenas están totalmente cercados, se les acecha por muchos frentes. Tanto en el ámbito judicial, donde se llevan a cabo los litigios en torno a la posesión de las tierras, como en el Congreso Nacional, donde se intenta reglamentar la exploración de los recursos naturales de sus tierras.

Desarrollo indígena, otro reto

El tercer desafío para los pueblos indígenas de Brasil es hallar la forma de conciliar la presión que tienen desde el exterior con su propio modo de organizarse; desarrollar su autonomía y fortalecerse para poder pensar luego en el desarrollo sustentable al interior de sus territorios, como en el caso de Raposa Serra do Sol.

Debe lograrse un desarrollo que coincida con los modos de vida de los pueblos indígenas, con sus planes de vida, con el bien vivir, como decimos. Se debe planear y programar cómo van a vivir los pueblos indígenas dentro de 50 ó 100 años, cuáles son los tipos de recursos que todavía hay en las tierras indígenas y así desarrollar proyectos propios según la realidad y su modo de vivir de cada pueblo.

Ése es el desafío que veo para los pueblos indígenas, quienes en la actualidad se ven obligados a actuar en un contexto político y jurídico que no es el suyo, en el cual no está planeada la participación de los pueblos indígenas por lo que a éstos les toca participar y tomar parte de los procesos. Así, el modo de gestión de las tierras, de la gestión ambiental y el desarrollo sustentable, también son demandas muy presentes que deben ser discutidas dentro de las políticas públicas. La demanda es que el Estado brasileño tome en cuenta la existencia de esa parte de la sociedad, y más que hacernos valer ciertos derechos, es necesario que tengamos políticas públicas específicas.



Movimiento indígena contra la Portaria 303

La Portaria 303 (Decreto 303) es algo que nos están intentando hacer aceptar a fuerza y la resistencia contra esta imposición jurídica es una de las grandes batallas del movimiento indígena de Brasil.

Su origen radica en situaciones surgidas en Raposa Serra do Sol, donde, tras una serie de conflictos con los hacendados de arroz en la región, en 2009 la Suprema Corte decidió demarcar un área continua de esas tierras indígenas.

Luego de tres años de juicio por las tierras de Raposa Serra do Sol, la Defensa General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués) decidió editar un decreto donde intenta implementar para todas las tierras indígenas del país las 19 condicionantes, definidas por la Suprema Corte para la demarcación en área continua de la T.I. Raposa Serra do Sol, en el 2009.

Una de las principales consecuencias de estas acciones serían la exclusión y restricción de cualquier especie de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, lo cual juega a favor de la instauración de todo tipo de megaproyectos, que podrían realizarse en tierras indígenas. Esto es una violación al derecho de defensa, uno no tiene cómo defenderse porque el propio Estado brasileño quiere imponer reglas e imponer megaproyectos sin consultar a los pueblos indígenas.

Honduras

No al “desarrollo” ni al “capitalismo verde”

En Honduras, los pueblos indígenas no sólo luchan contra el despojo de sus tierras, de las que se explota la madera, el aire, el agua y los recursos minerales que albergan, sino que además viven amenazados por la cada vez más preocupante presencia de bases militares estadounidenses que, con el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia, protegen los intereses de inversionistas y empresarios.

Tomás Gómez Membreño, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Hace más de 520 de años que los colonizadores vinieron a robarnos los bienes naturales a nuestros pueblos indígenas de América.

En la Honduras de hoy, se está militarizando el país con el Plan Colombia. Aquí, los estadounidenses pretenden hacer la base militar más grande de Latinoamérica, invirtiendo mil 300 millones de dólares. Sus excusas son el supuesto combate al narcotráfico y la inseguridad del país. Con estos pretextos, el gobierno de Estados Unidos ha puesto nuevas bases militares en la miskita hondureña.

En esta región existe un yacimiento de petróleo. Por eso, el objetivo principal del Estado es asegurar los capitales de las empresas, y los Estados Unidos dan apoyo económico a la policía y al ejército, para que

éstos repriman al pueblo, y los empresarios se sientan seguros y puedan seguir invirtiendo.

Al territorio del pueblo lenca están llegando diversas empresas que dicen buscar el "desarrollo" de los pueblos con el "capitalismo verde", pero que en realidad están acaparando bienes naturales mediante el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD Plus) que supuestamente busca la reducción de la deforestación, pero que en realidad es un proyecto de privatización que beneficia a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y al Programa de Apoyo Institucional para la Integración Regional (USAID). Estas organizaciones pretenden mercantilizar y poner precio al oxígeno con la implementación de más de 360 concesiones de represas hidroeléctricas, mineras y megaproyectos eólicos en los pueblos indígenas de Honduras. Esto significaría para los pueblos originarios, como el pueblo lenca, la privatización del territorio y la pérdida de su soberanía.



En el pueblo lenca, las empresas Rio Power, Intereipor, Minerco, Patuca I, II y III, la represa Chinacla y otras que son prestanombres como la represa Gladys Aurora, aseguran que su fin es el "desarrollo" de la comunidad y prometen cosas que no pueden cumplir, y hasta ofrecen regalías. Pero aquí la gente no acepta estas propuestas, porque lo que las empresas quieren utilizar es el agua, el

oxígeno, el aire, y desde la cosmovisión indígena, los bienes naturales no son mercancías se cuidan y se defienden porque el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, y la naturaleza sí puede vivir sin la gente.

Ante estos proyectos de acaparamiento y recolonización estamos movilizándonos y articulándonos nacional y regionalmente, ejerciendo nuestra autonomía en asambleas comunitarias municipales y en cada concejo indígena donde tiene presencia el COPINH, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con ayuda de nuestras radios comunitarias hemos logrado sacar a varias represas hidroeléctricas de los municipios de San Francisco de Opalaca, San Marcos de la Sierra Colomocagua, Intibuca y Santa

Elena La Paz, pues ya fue comprobado que violentan los títulos comunitarios y los títulos individuales sin consultar a la comunidad.

Colombia

“Aquí sigue latente la invasión”

El reconocimiento de los saberes ancestral y la enseñanza de éstos a las nuevas generaciones son básicos para poder seguir defendiendo los territorios indígenas de los embates de las empresas trasnacionales que –coludidas con el gobierno de Colombia– atacan de manera sistemática a las comunidades para apropiarse de sus recursos minerales.

Nidali Milton Santacruz Aguilar, de la nación gunadul.

En el 2012 las cosas no han cambiado, lo que ha cambiado es el método mediante el cual el Estado colombiano manipula al pueblo indígena.

Quisiera pensar que nuestras hijas e hijos y nuestras nietas y nietos tendrán en cuenta el mensaje orientador. Te invoco, Nana Baba nuestros creadores, todos los días para que retomemos el ideal de convivencia que tú nos señalaste, para que nuestros hijos actúen en defensa de la Madre Tierra y entiendan que cada rincón de la naturaleza está protegido por sitios sagrados para que sus hijos, los humanos, podamos vivir con alegría.

Para nosotros, los pueblos indígenas de Colombia, sigue latente la invasión. Hay políticas del gobierno para hacer exploración y explotación de los recursos de la biodiversidad en nuestros territorios, como la extracción minera patrocinada por el Estado.

En tiempos así, es preciso valorar los saberes ancestrales y reconocer a los sabios como poseedores de verdades que hacen posible la existencias de culturas indígenas con su cosmovisión, cosmogonía y espiritualidad. Tenemos que proteger los conocimientos de las sabias y de los sabios: las lenguas, las semillas, las plantas, los sitios sagrados, la historia de vida y la de origen, la música, las cuencas y las quebradas. Debemos proteger estos tesoros de las multinacionales, de las transnacionales, de los agentes externos, de la iglesia, de la religión, del Estado, del capitalismo salvaje y de los investigadores.

Los territorios indígenas de Colombia están siendo concesionados para la explotación minera. El gobierno está regalando nuestros recursos a

los multinacionales. Ante todo este saqueo, los pueblos de América tenemos que unirnos en una sola para defender la Madre Tierra y lograr la supervivencia de la humanidad.

Panamá

Nuestra mekëtjër (Pacha Mama) está de luto

Desde el sur hasta el norte del continente americano, los pueblos indígenas han sido despojados durante más de 500 años de sus recursos. Se les ha maltratado, explotado, esclavizado, menospreciado. Durante siglos, los colonizadores han saqueado los territorios ancestrales, sin mostrar ningún respeto por la naturaleza, la Pacha Mama o mekëtjër, como la llama el pueblo naso.

En Panamá la lucha es, principalmente, por el reconocimiento del territorio, pero los pueblos ngäbe-buglé y naso, quienes también resisten a la construcción de la mina en Cerro Colorado, a una hidroeléctrica en el norte, a una carretera y libran una batalla contra los inversionistas estadounidenses que pretenden apropiarse de los atractivos archipiélagos caribeños para atraer al turismo a la zona.

Eliseo Vargas Hijo, vocero del pueblo naso de Bocas de Toro, Panamá.



Nosotros formamos parte de los pueblos originarios de Panamá, éstos que desde siempre hemos habitado nuestra Pacha Mama con nuestras culturas originarias, nuestras costumbres, bailes, comidas, vestidos, con nuestro propio idioma y tradición, nuestras historias, mitos y leyendas. Llevamos en nuestros corazones e impreso en

nuestros espacios vitales un gran martirio desde que el imperio colonial invasor nos regaló a manos llenas desolación, sangre, luto, dolor,

despojo y explotación, y pensamos que de alguna manera lo continúa repartiendo durante este siglo, mediante el nefasto y corrupto imperio hegemónico.

Nosotros somos esos pueblos que con original iniciativa y probada capacidad, edificamos estructuras que aún hoy se admiran y desconciertan a los "magnates" de las ciencias actuales, y que certifican la inteligencia propia de quienes a través del tiempo hemos sido avasallados, sometidos y masacrados por deshumanizadora globalización capitalista.

Los pueblos originarios de América Latina, desde los hermanos de Mato Grosso, hasta los hermanos de los pueblos originarios en México, centro y sur de nuestra Abya Yala, todos hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne viva persecuciones, violencia, tortura, privación de nuestra libertad, despojo de nuestras tierras, pérdida de nuestros territorios y espacios vitales y crimen a través de proyectos que cercenan las venas de nuestra mekëtjër para la creación de represas. Padecemos la contaminación, la deforestación y muchos otros flagelos contra nuestro entorno bionatural y la degradación y desertificación de nuestra biodiversidad.

Para los pueblos originarios no hay nada que celebrar, nuestra Pachamama y nuestra mekëtjër están de luto en clara conmemoración al día en que arribaron a nuestra Abya Yala los mercenarios de occidente. Nada de efemérides impuestas, nada de fechas convenientemente creadas, porque nosotros, nuestras raíces y descendencia, constituyen un timbre de orgullo y honor para quienes habitamos en esta parte de nuestra Pacha Mama llamada Abya Yala.

Los aventureros del imperio genocida de aquella época nada descubrieron, ni hubo un fabricado "encuentro entre dos mundos y culturas". Los pueblos originarios existíamos ya aquí, teníamos y seguimos teniendo presencia viva, dinámica, activa, aportamos luces e iniciativas, contribuimos al crecimiento de cada espacio geográfico y luchamos por nuestra reivindicación originaria.

Nosotros formamos parte de esos pueblos originarios a quienes el sistema pretende seguir pisoteando con estatuas, títulos y condecoraciones a lo largo y ancho de nuestro continente, e imponiéndonos los nombres de quienes nos invadieron, masacraron, despojaron y convirtieron en víctimas de sus criminales ambiciones y de sus aberrantes apetitos.

Cada fecha del calendario es nuestro día, ya que cada día forma una unidad indisoluble con nuestra mekëjtjër y nuestra Pacha Mama, en la que palpitan nuestros corazones y el de nuestros héroes, nuestro insuperable coraje, nuestro probado honor, nuestra justificada rebeldía, nuestros sacrificios en pro de nuestra lucha, resistencia y reivindicación originaria.

Nuestros ancestros y nuestros descendientes, líderes y lideresas nos señalan la correcta dirección por la que debemos transitar, con coraje, rebeldía y valentía, sin tregua ni concesiones, para diseñar otro mundo que es posible sin las garras del monstruo imperialista y sus cómplices, sin sus frutos degenerados, sin sus engaños y cinismo, sin sus genocidios y múltiples aberraciones que cada día escriben episodios de muerte a nuestro ambiente natural, a nuestra biodiversidad, a nuestro clima y a todas las especies que habitamos Abya Yala.

Conmemoremos esta fecha con combativas y claras muestras de lucha y resistencia por la reivindicación de nuestros pueblos originarios y territorios ancestrales herencia de nuestra mekëjtjër y de nuestra Pacha Mama.

